

## CRONICA DEL MES

### ENERO-FEBRERO

**Ernesto Cruz Alfaro**

En el marco de un recrudecimiento de los operativos de contrainsurgencia, discontinuados temporalmente por la tregua de fin de año, así como de un progresivo desgaste político del PDC, manifiesto en el terreno cedido ante la derecha en el caso de la ley electoral, el 17 de enero quedó formalmente abierta la campaña electoral, sin que la corte suprema de justicia hubiera dictaminado todavía sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el reverendo Ricardo Fuentes Castellanos y el Dr. Guillermo Guevara Lacayo en contra, respectivamente, de las leyes electorales publicadas por el presidente Duarte y la asamblea legislativa.

Anticipándose a un dictamen que preveía desfavorable —como de hecho ocurrió posteriormente—, el PDC efectuó un amplio recambio de figuras en su estrategia de campaña, lo cual no sólo supuso el retiro de la candidatura de Alejandro Duarte a la alcaldía capitalina, sino también la renuncia de José Antonio Morales Ehrlich a su nominación como primer diputado propietario del PDC por el departamento de San Salvador, y el traspaso de su hermano, Manuel, del ministerio de comercio exterior a la presidencia del INCAFE, con notoria incomodidad de los directivos de la asociación cafetalera (ASCAFE).

Por su parte, en vista de las demostraciones de debilidad política ofrecidas por el PDC, la derecha aprovechó su control sobre el Consejo Central de Elecciones (CCE) para consolidar sus mayores posibilidades electorales y solicitar,

através de una petición firmada por el mayor D'Aubuisson (ARENA), Raúl Molina Martínez (PCN) y el coronel y doctor Roberto Escobar García (PAISA), “esperar un tiempo prudencial mientras se resuelven los 2 recursos de inconstitucionalidad” y trasladar los comicios, originalmente programados para el 17 de marzo, al último día de dicho mes.

Entre tanto, la devolución a la asamblea legislativa del proyecto de presupuesto, con observaciones, así como de la ley de salarios aprobada, parecieron indicar que el presidente Duarte optó por evitar agudizar su confrontación con el legislativo a la vista del curso tomado por el veto al proyecto de ley electoral. De hecho, la información que acompañó la devolución del presupuesto a la asamblea señalaba que, aunque parecía “lógico y pertinente” vetar el proyecto, “sin embargo, habiendo considerado las consecuencias del veto, por la interpretación que hiciera la Asamblea en el caso de la Ley Electoral, el Organismo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que es apropiado en este caso utilizar el procedimiento de observaciones que prescribe la Constitución.” En la misma línea, Julio Adolfo Rey Prendes, ministro de la presidencia, declaró que, a pesar de que se rebajaba el sueldo del vicepresidente y se suprimían los de los comisionados presidenciales y de que el documento encerraba “errores e incongruencias suficientes para ejercer el derecho de veto,” la decisión del ejecutivo de no recurrir a éste mostraba su voluntad de “me-

jores relaciones con la asamblea a través de un diálogo constructivo que sea beneficioso para el interés nacional." De parte de la asamblea, Hugo Carrillo (PCN) calificó de "constructiva" y "políticamente flexible" la actitud del mandatario, y aseguró que "en ningún momento vamos a tomar posiciones obcecadas, siempre que se nos demuestre que se tiene la razón;" mientras que María Julia Castillo, presidenta del legislativo, afirmó sentirse "complacida de que el presidente se hubiera decidido por las observaciones al presupuesto y no por el veto, que hubiera complicado la situación," y añadió que si las observaciones presidenciales eran razonables "es posible que nosotros las atendamos." De hecho, sin embargo, la asamblea aprobó el 29 de enero la ley del presupuesto, por 33 votos de ARENA, PCN y PAISA (frente a la abstención de 24 diputados democristianos, uno de AD y el del PPS), ateniéndose fundamentalmente al proyecto original. Excepción hecha de los 22.953.250 colones solicitados por el ejecutivo para el programa de desarrollo de la investigación y extensión agrícola del MAG, a cuya asignación se opuso la asamblea en un principio, pero que finalmente aprobó, el presupuesto definitivo mantuvo el recorte de 4.295.990 colones en las asignaciones a la presidencia de la república, no obstante las observaciones de Duarte de que ello afectaría los programas de administración superior, administración general y servicios de información y divulgación.

Paralelamente al forcejeo político entre los órganos del Estado, una repentina ola de atentados y asesinatos desatada a lo largo del mes colocó en muy precaria posición el control del poder formal sobre la violencia política. La cifra de víctimas recogidas en la prensa abarcó un amplio espectro de tendencias políticas, desde una aparente reactivación de los escuadrones de la muerte en contra del movimiento sindical, hasta la eliminación de personas que, en el pasado o recientemente, tuvieron alguna vinculación con la Fuerza Armada, pasando por diversos activistas y cuadros del PDC, PCN y ARENA. En el transcurso de una quincena fue ultimado el alcalde de Santa Elena (Usulután), perteneciente al PCN, mientras que ARENA sufrió el asesinato del tesorero municipal de Santa Tecla; la alcaldesa de San Jorge (Usulután); el conocido cafetalero y miembro de la directiva municipal de Santa Ana, Rafael Napoleón Portillo, y el jefe del departamento administrativo de la fiscalía y candidato a

diputado, Medardo Avelar Bonilla. A raíz de esta última muerte, ARENA publicó un campo pagado en el cual denunciaba "una conspiración para eliminar selectivamente a compañeros de lucha nacionalista" y culpaba de las muertes a "esos escuadrones sanguinarios que promueven la cultura del terror." Entrevistado al respecto, D'Aubuisson hizo aún más explícitas las acusaciones, atribuyendo a los "escuadrones de la muerte verdes" el "terrorismo político" sufrido por su partido y previno que ARENA presentaría una denuncia pública sobre la "carnicería" desatada en su contra; a todo lo cual añadió, durante el mensaje de apertura de campaña, el 24 de enero, que "ARENA siempre rechazará con energía el uso de la violencia y toda forma de terrorismo, venga de donde venga, por cuanto tales métodos están absolutamente contrapuestos al respeto pleno de los derechos fundamentales del hombre."

Por su lado, en respuesta al señalamiento de los "escuadrones verdes," el presidente Duarte responsabilizó de los asesinatos a los "terroristas de izquierda;" aclaró que los escuadrones "pueden ser de ambas extremas, unos y otros luchando para desestabilizar al gobierno" y aprovechó para recordar que "en regímenes pasados," D'Aubuisson dirigía en casa presidencial "una oficina de represión conocida como ANSESAL, donde se tenía un registro de ciudadanos y se les acusaba de comunistas en forma arbitraria," lo cual "dio lugar a la situación de violencia que hasta hoy padecemos." Al día siguiente de esta respuesta, D'Aubuisson dio nuevas declaraciones reiterando las acusaciones sobre el "terror político" orquestado contra ARENA. Ese mismo día, la prensa informó el ametrallamiento de 2 miembros de la seguridad del coronel Reynaldo López Nuila, viceministro de seguridad, mientras repartían una revista de esta dependencia; así como el de 2 jóvenes propagandista del PDC, ultimados en las inmediaciones del INFRAMEN.

Por su parte, aunque en una línea distinta de ataque, la Fuerza Armada también cargó con una buena parte de las víctimas del mes, entre ellas un mecánico de la fuerza aérea, un ex-agente de la Policía de Hacienda y el teniente retirado Julio César Contreras. El ametrallamiento de este último fue explícitamente reivindicado por el frente "Clara Elizabeth Ramírez" (FCER), al igual que el de un agente supernumerario de la Policía Nacional destacado en la

fábrica "El León;" el de Jesús Flores Mateo, "conocido en los círculos policiales como el torturador Indio Mateo," y el de Ulises Zúñiga, ultimado en Ciudad Delgado, sindicados los 2 últimos de pertenecer a los escuadrones. En el seno del movimiento sindical, destacaron el asesinato del ex-secretario general de la FUSS, Julio César Castro Belloso, y el desaparecimiento del secretario general de la FSR, Salvador Escalante, capturado por efectivos de la Policía Nacional vestidos de civil en momentos en que la federación celebraba su VI Congreso Federal Ordinario.

En lo referente al conflicto militar, la Fuerza Armada inició el año con la adquisición de mayor y más sofisticado equipo aéreo, la reanudación de operativos masivos de corta duración y la intensificación de esfuerzos por formar un nuevo tipo de patrullas de defensa civil, desarrollar las potencialidades de las operaciones psicológicas y ampliar los programas de acción cívica, articulando todo ello en el marco de una estrategia de contrainsurgencia en cuyos supuestos fundamentales se empezó a explicitar más abiertamente la convicción de que la lucha contra el FMLN incluye de modo decisivo, además de los aspectos propiamente militares, dimensiones de orden económico y social. Apoyo sustancial de esto último lo constituirían los notables incrementos de la ayuda humanitaria canalizada a través de AID, cuyos nuevos programas contempla gastos de 26 millones de dólares anuales durante los próximos 3 años en proyectos de empleo temporal, alimentos de emergencia y reubicaciones limitadas.

Junto a ello, la escalada de enfrentamientos militares empezó a ampliarse desde la primera semana del año. En su emisión del 6 de enero, Radio Venceremos informó sobre recios combates en la zona norte de San Miguel, particularmente en las jurisdicciones de Ciudad Barrios y Sesori. Al día siguiente, el FMLN emboscó en el Cerro de la Campana (San Vicente) a tropas del batallón "Jiboa," de la 5a. Brigada de Infantería. Tras la emboscada, se entablaron fuertes combates, al tiempo que 2 aviones *Fuga* y 16 helicópteros sobrevolaron el cerro intentando infructuosamente acorralar a los insurgentes. Según informes preliminares de COPREFA, en las filas del ejército se produjeron 17 muertos, entre ellos un teniente, y 43 heridos, entre ellos 4 oficiales, además de 13 efectivos desaparecidos.

En apoyo de la Fuerza Armada intervino el primero de los aviones C-47 recién llegados de Estados Unidos. Según expertos militares, el

C-47, versión militar del DC-3 de hélices, es el aparato más sofisticado con que cuenta la fuerza aérea salvadoreña actualmente para el apoyo a operativos de contrainsurgencia. El avión puede permanecer 8 horas en el aire y está artillado con 3 ametralladoras calibre .50 capaces cada una de disparar 550 balas por minuto. Las 3 piezas de artillería pueden ser operadas simultáneamente por el piloto, quien además puede utilizar una mirilla especial para visión nocturna mientras sobrevuela lentamente su objetivo. El envío de los C-47 se dio en el marco de declaraciones de la Fuerza Armada sobre la necesidad de implementar una estrategia para el despoblamiento de las zonas bajo presunto control del FMLN, mediante la demarcación de áreas identificadas como de "fuego libre" y la descarga permanente sobre ellas de fuego concentrado e indiscriminado de artillería y aviación.

Mientras tanto, la Fuerza Armada reanudó y amplió operativos en diversos puntos del territorio nacional. Por un lado, el 5 de enero, tropas del Batallón aerotransportado y comandos de la 5a. Brigada de Infantería, reforzadas por unidades de CETIPOL, la brigada de artillería y la fuerza aérea, fueron movilizadas sobre el área del bajo Lempa, desde San Carlos hasta la costa, abarcando las islas de La Pita, Montecristo y otras, en persecución de columnas guerrilleras que se replegaron después de los combates de La Campana. El mismo día, previo operativo de "ablandamiento" por helicópteros y el C-47, cerca de 3.000 efectivos de los batallones Arce y Belloso, así como de la 3a. Brigada de Infantería, el Destacamento Militar No. 4 y otras unidades, comenzaron a ser desembarcados al norte de Morazán. Cerca de 36 camiones convergieron hacia San Francisco Gotera, al tiempo que un puente de helicópteros desembarcaba efectivos en las poblaciones de Arambala, Joateca, San Fernando, Villa El Rosario, Torola, Jocoaitique y otras. Simultáneamente, un tercer operativo fue montado en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y norte de San Salvador, particularmente en el área de Guazapa y la carretera Troncal del Norte, con participación de 2.000 efectivos del batallón Bracamonte la 1a. Brigada de Infantería, con apoyo de la fuerza aérea y artillería.

Por su parte, no obstante el repliegue al que el FMLN se vio forzado por estos operativos, unidades guerrilleras atacaron simultáneamente el 22 la estación repetidora de Radio Nacional,

en el kilómetro 18 de la ruta militar y las instalaciones de la base militar de Santa Rosa de Lima. En el ataque a esta última, el FMLN utilizó lanzagranadas, ametralladoras de .60 milímetros y fuego de morteros de 81 milímetros. Asimismo, las unidades guerrilleras incendiaron la subestación de la CEL del kilómetro 18, dejando sin fluido eléctrico a todo el departamento de Morazán y norte de La Unión.

En lo referente a la actividad de sabotaje, el FMLN impuso entre el 18 y el 25 un nuevo paro del transporte a nivel nacional, como consecuencia del cual el tráfico en la zona oriental se redujo a un 15 por ciento. Además de ello, fueron atacadas las instalaciones del beneficio de café "San Luis" (San Miguel) y destruidos cerca de 6.000 qq. de café de exportación y parte de la maquinaria e instalaciones, ocasionando pérdidas por 980.000 dólares; así como el plantel algodónero "El Martillo," en las proximidades de Jiquilisco (Usulután), donde los insurgentes procedieron a la destrucción de 1.500 pacas, causando pérdidas por 1.200.000 dólares.

No obstante la intensidad de las acciones militares, el desarrollo de la guerra no pareció indicar que la Fuerza Armada estuviese obteniendo victorias efectivas ni que el FMLN diera muestras de debilidad militar. En aquellos lugares donde la Fuerza Armada realizó operativos masivos, el FMLN no sólo logró evadirlos y en algunos casos enfrentarlos con relativo éxito, sino que además incrementó su sabotaje a la producción, a la energía eléctrica e intensificó el control de carreteras.

De cara al diálogo, los acontecimientos del mes se desarrollaron en la dirección de un debilitamiento de las posibilidades de reanudar las conversaciones en el corto plazo, en buena medida por el propio debilitamiento político de Duarte en su confrontación con los otros órganos del Estado y del correlativo endurecimiento en las posiciones de la derecha, anónimamente explicitadas en dos documentos de "corte fascista" que un autodenominado Consejo de Movilización Nacional hizo circular en diversos sectores políticos, especialmente en las filas de la Fuerza Armada, haciendo incluso sugerencias de golpe de Estado. Aparte de la Iglesia y de los obispos centroamericanos reunidos en Tegucigalpa, ninguna voz relevante se pronunció con decisión sobre la necesidad de proseguir el proceso de diálogo.

Envuelto en este clima de presiones adversas, el presidente Duarte endureció también su propia posición, al tiempo que acusó al FDR-FMLN de querer internacionalizar el conflicto y de no haber dado muestras de sinceridad, convirtiendo las reuniones por la paz en mero "diálogo táctico." Asimismo, rechazó la participación norteamericana en las comisiones negociadoras, ante sugerencias de los frentes de que Estados Unidos debería estar presente como parte involucrada y declaró que el diálogo se reanudaría hasta que la izquierda diese "señales de buena voluntad." Por su parte, el ministro de la presidencia, Rey Prendes, fue más explícito al afirmar que el mandatario requería más apoyo popular para proseguir el diálogo y qué, dadas las demostraciones de fuerza de la derecha, éste se pospondría hasta después de los comicios.

En el plano internacional, esta situación se tradujo en que el gobierno salvadoreño asumiera posiciones poco conducentes a la distensión regional, al secundar el bloqueo sistemático de Estados Unidos a las gestiones de Contadora y expresar su respaldo a la administración norteamericana en su decisión de no continuar participando en el caso promovido por Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya. En recompensa de tal respaldo, la Casa Blanca acudió al Congreso en demanda de 626 millones de dólares —426 para ayuda económica y 200 para asistencia militar— en orden a apuntalar el régimen del presidente Duarte, en un renovado esfuerzo por recuperar el terreno cedido a la extrema derecha y para reforzar la capacidad ofensiva de la Fuerza Armada, inoperante hasta el momento en orden a asestar golpes decisivos al FMLN, pese a los operativos desplegados durante el mes.

En el marco del esfuerzo gubernamental por llevar adelante el proyecto electoral, el cual en el terreno militar se concretó en el inicio de la "Operación Libertad," el mes de febrero representó políticamente una mayor consolidación de las posibilidades electorales de la derecha sobre el PDC.

En acto celebrado el 4 en el hotel "El Salvador Sheraton," los secretarios generales de ARENA y PCN, Roberto D'Aubuisson y Raúl Molina Martínez, anunciaron oficialmente que, después de 3 meses de negociaciones, ambos partidos habían decidido suscribir un pacto de coalición a nivel nacional para participar en las elecciones de diputados y alcaldes del 31 de marzo. En la rueda de prensa que siguió al anuncio, am-

bos dirigentes aseguraron que sus partidos habían superado las diferencias ideológicas de antaño en la búsqueda común de una "oposición constructiva al gobierno central," al tiempo que manifestaron absoluta "inocencia" respecto del pasado político del país y desmintieron las acusaciones de que la coalición constituyera el "reagrupamiento de las fuerzas del pasado que durante 19 años estuvieron en el poder hasta ser derrotadas el 15 de octubre de 1979."

Tres días después, quedó por fin formalmente resuelto el problema de la ley electoral suscitado el mes anterior, al responder la corte suprema de justicia positivamente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Ricardo Fuentes Castellanos contra la ley electoral publicada por el presidente Duarte en el *Diario Oficial* del 18 de diciembre; y declarar simultáneamente sin lugar el interpuesto por Guillermo Guevara Lacayo contra la publicada por María Julia Castillo, presidenta del Legislativo.

Paradójicamente, tanto el PDC como la oposición justificaron dicha confrontación como un momento necesario en el "proceso de maduración" de la democracia. Excepción hecha de algunos voceros de la "revolución moral," los principales dirigentes políticos de la derecha resistieron la tentación de promover un antejuiicio contra el presidente Duarte, en previsión de las repercusiones que una iniciativa de tal índole podría acarrear al proceso de institucionalización del poder formal, sobre el cual la propia derecha estaba ejerciendo un control importante a través de los poderes legislativo y judicial. Rafael Morán Castaneda (PCN) resumió el clima de opinión prevaleciente al advertir que "un antejuiicio promovido por la Asamblea en contra del Ing. Duarte es una cosa seria y delicada y ni en broma se debería tocar ese punto."

Mientras tanto, en el aspecto propiamente electoral, el Consejo Central de Elecciones (CCE) concluyó el 14 la recepción de la documentación de los candidatos propietarios y suplentes de los 9 partidos participantes (PDC, AD, ARENA, PCN, PAISA, PPS, POP, MERECE y PAR), en medio de una contienda propagandística cuyos rasgos más notorios siguieron siendo la ausencia de plataformas programáticas y el intercambio de diatribas. En respuesta al calificativo de "dictadura verde" que le aplicaba la propaganda de ARENA, el presidente Duarte señaló que el mayor D'Aubuisson de "prófugo de la justicia se incor-

poró al proceso democrático" y denunció que "desde diciembre del año pasado la extrema derecha comenzó una campaña de desestabilización y sobre todo a acercarse a la Fuerza Armada insistiéndole que lo mejor es el golpe de Estado." En el mismo contexto, el PDC no dejó pasar la oportunidad de explotar para su campaña la noticia de la detención de Francisco Guirola, antiguo colaborador del mayor D'Aubuisson, capturado en Corpus Christi, Texas, cuando pretendía sacar fraudulentamente de Estados Unidos en un jet privado 5.8 millones de dólares presuntamente destinados a financiar la campaña de ARENA.

En el campo económico, el ministro de planificación, Fidel Chávez Mena, firmó durante la primera semana de febrero 3 nuevas enmiendas a convenios de préstamo con AID, por un monto de 15.3 millones de dólares, destinados a financiar proyectos de recuperación industrial, restauración de servicios públicos y venta de productos agrícolas. Sin embargo, no obstante las coincidencias entre el gobierno y el sector privado en lo relativo al diagnóstico de la crisis económica y los objetivos a alcanzar, así como en la escasez de divisas y el desempleo generalizado como dos problemas fundamentales a resolver, las políticas de solución defendidas por ambas partes siguieron desarrollándose en líneas divergentes, sin que el financiamiento gubernamental a la inversión privada pareciera obtener la respuesta esperada en términos de reactivación económica.

Por su lado, el gobierno siguió insistiendo en el incipiente comportamiento positivo de algunos indicadores económicos, al tiempo que procedió a explotar más sistemáticamente las virtualidades propagandísticas encerradas en la reforma agraria. En la inauguración del seminario nacional sobre reforma agraria y desarrollo rural, el presidente Duarte señaló que el sector rural era "elemento estratégico para la economía y un medio de generar justicia social" y explicó que en El Salvador "las cosas han cambiado: hoy las mejores tierras son del campesino; tampoco existe una estructura bancaria al servicio de las minorías privilegiadas, ni un sistema político dominado por élites," situación que "no pueden comprender los de la extrema derecha ni los de la extrema izquierda." Asimismo, indicó que "el desarrollo está vinculado directamente a la paz, al cese de la violencia" y que "no podrá haber paz estable sin desarrollo y el desarrollo estará mutilado sin la paz;" e informó que el 60 por

ciento del algodón era producido por las cooperativas del sector reformado, así como el 20 por ciento de la producción total de arroz; el 31.4 por ciento de la de caña de azúcar y el 15 por ciento del café.

En contraste, la Asociación de Cafetaleros (ASCAFE) siguió reiterando sus denuncias de que los precios fijados por el INCAFE no cubrían sus costos de producción y atribuyó a la "incapacidad y corrupción" del instituto de responsabilidad por el decremento en 2 millones de quintales de café oro en cada uno de los ciclos cafeteros 1983-1984 y 1984-1985, ocasionando que en ambos periodos dejase de percibirse 582.16 colones en concepto de salarios, 560 millones de dólares en divisas y 141 millones de dólares en impuestos indirectos.

En el mismo marco de críticas, diferentes organizaciones empresariales externaron su protesta por la "lentitud y burocracia en la asignación de divisas por parte del Banco Central de Reserva (BCR)," atribuyendo a ello el ser una de las restricciones más fuertes a la recuperación de la actividad económica, al tiempo que se pronunciaron por una línea de mayores incentivos a la exportación como requisito indispensable para la recuperación de la actividad industrial. El BCR respondió que el problema de las divisas no era de burocracia, sino sencillamente de escasez, y recordó que la deuda externa total del país ascendía a más de 1.900 millones de dólares.

A su vez, el ministro de planificación informó que el desempleo ascendía al 30 por ciento de la población económicamente activa (2 millones de salvadoreños), pero indicó que los programas gubernamentales de generación de empleo habían abierto 8.000 plazas, y señaló que durante 1984 y 1985 se había recibido la ayuda externa "más grande que jamás se haya tenido. Sólo en 1984 ascendió a 1.120 millones de colones, 80 por ciento de los cuales se dedicaron a actividades productivas del sector industrial, tales como la compra de insumos, maquinaria y materia prima." En alusión a las declaraciones, COEXPORT observó que el desempleo alcanzaba niveles aún mayores que los señalados por el ministro y atribuyó la falta de confianza para invertir a "las medidas gubernamentales de distanciamiento de la empresa privada," mientras que la Cámara de Comercio e Industria externó su preocupación de que "la desocupación en masa" era el "mejor caldo de cultivo del fermento revolucionario antidemocrático."

Sumándose a la confrontación, el ministro de hacienda señaló que, después de 7 meses de pedirles recomendaciones y sugerencias para superar las dificultades que el sector privado enfrentaba, ninguno de los directivos de las distintas organizaciones de la empresa privada había respondido a la invitación. Desmintiendo el señalamiento, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) indicó que ya había presentado al ministerio de planificación en diversas ocasiones un "elevado número de recomendaciones concretas que señalaban hasta quién era el responsable de su ejecución;" reiteró sus exigencias de que el gobierno favoreciera un clima de "confianza y de respeto propicio para la inversión" y señaló que lo que se necesitaba era "voluntad política al más alto nivel del órgano ejecutivo."

En el aspecto militar, el mes constituyó un periodo de renovada acumulación de fuerzas, tanto por parte de la Fuerza Armada como del FMLN, presuntamente en previsión de mayores y más frecuentes acciones militares a medida que se aproximaran los comicios del 31 de marzo.

En este contexto, despertaron especial inquietud en diversos sectores las versiones de que la Fuerza Armada efectuaría en breve un reclutamiento masivo de la población; estas versiones fueron corroboradas a mediados del mes por declaraciones del viceministro de seguridad, Reynaldo López Nuila. Este dijo que el ministerio de defensa estaba estudiando un anteproyecto de ley para la implementación del servicio militar obligatorio, con el objetivo de que todos los salvadoreños participen "de la obligación de defender a la patria." López Nuila admitió que en los días precedentes la Fuerza Armada había estado efectuando reclutamientos en diversos sectores del país e informó que el número de jóvenes en edad de prestar el servicio militar era de 2 a 3 veces la cantidad de efectivos con que la Fuerza Armada contaba.

Por su parte, en declaraciones ofrecidas a la prensa el 6 de febrero, Ricardo Aristides Cienfuegos, jefe de COPREFA, expuso algunos aspectos del crecimiento experimentado por la Fuerza Armada en los últimos 4 años, al pasar de los 16.000 efectivos que poseía en 1981 a los 45.000 con que contaba en la actualidad; los cuales estaban, además, mejor equipados y "más fogueados en experiencia combativa de guerrilla." Al mismo tiempo, informó que la fuerza aérea había recibido recientemente 3 avio-

nes más del tipo C-47 artillado, así como otros 4 helicópteros UH-1H, también artillados, con lo cual totalizaba 9 aviones A-37 de bombardeo, 6 aviones C-47 y una flotilla de 40 helicópteros. Por otro lado, indicó que la Fuerza Armada proyectaba para 1985 un programa masivo de acción cívica militar, confirmando así diversos datos previos sobre una nueva estrategia de contrainsurgencia, lo cual parecería sugerir un importante giro en el patrón de guerra del ejército.

Particularmente ilustrativas de la nueva mentalidad prevaleciente en el alto mando lo fueron las declaraciones del coronel Sigifredo Ochoa, quien comentó que "poco a poco hemos ido comprendiendo cómo combatir en esta guerra. Teníamos un ejército con instrucción para una guerra regular, con comandantes que no entendían este problema. Los comandantes que estamos hoy entendemos que ésta es una guerra social, militar, económica y política." Ochoa agregó que esto exigía de la Fuerza Armada una estrategia contrainsurgente encaminada a montar "algo así como una estructura militar en un medio civil. Es lo que hacen los comunistas, que basan su trabajo en la organización de las masas y nosotros tenemos que hacer lo mismo."

En el terreno de las acciones militares, la Fuerza Armada señaló explícitamente que su actividad estaría orientada a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en todo el territorio nacional y que el objetivo de los operativos era el de "impedir concentraciones y reagrupamientos del FMLN" que pudieran converger "en una nueva ofensiva contra cualquier objetivo militar antes de las elecciones." Según información brindada por el general Adolfo Blandón, jefe del estado mayor, entre enero y febrero del presente año el ejército había realizado "19 operaciones mayores con tácticas muy especiales y 650 acciones de menor envergadura que le han cortado las líneas de abastecimiento al FMLN." Asimismo, indicó que el 90 por ciento de los recursos humanos de la Fuerza Armada se encontraba trabajando en el campo y que desde mediados de febrero el ejército había dado inicio a 153 operaciones más en forma simultánea, entre ellas la segunda fase del operativo Torola V, con participación de tropas de la 2a. Brigada de Infantería, el Batallón Arce, la 4a. Brigada de Infantería, los Destacamentos Militares Nos. 3 y 4 y apoyo de la fuerza aérea.

La actividad militar se concentró en la zona nororiental, particularmente en el área compren-

didada entre Ciudad Barrios (San Miguel) y Arambala, San Fernando y Cerro Cacahuatique (Morazán), y en las inmediaciones de Chinameca, San Luis de La Reina, Sesori, San Gerardo y El Pacayal (San Miguel). También se informó de acciones de relativa importancia en Mercedes Umaña (Usulután) y en Jutiapa, Tenancingo y San Isidro (Cabañas)

Por otro lado, en su homilía del 17, Mons. Rivera señaló haber estado recibiendo "denuncias de intenso cañoneo y bombardeo en las zonas aledañas a Guazapa y norte de Morazán," así como quejas de diversos párrocos de Chalatenango respecto de los impedimentos puestos por el ejército para el transporte de los víveres de Cáritas. El coronel Cienfuegos respondió al señalamiento puntualizando que "ese tipo de denuncias debería hacerse a través de los organismos correspondientes, y no públicamente porque carecen del fundamento moral que requieren."

Al finalizar el mes, según informes de COPREFA, los batallones Tecana, Tazumal, Pipil y Destacamento Militar No. 7, en coordinación con la brigada de artillería y el regimiento de caballería, efectuaron un operativo antiguerrillero en el área de Los Mangos, La Gloria, El Chaguíte, Tierra Blanca, Las Tablas y Hacienda El Secreto, en la jurisdicción de Nueva Concepción (Chalatenango), donde encontraron "15 fosas comunes con igual número de muertos." Otros lugares donde la Fuerza Armada encontró cementerios clandestinos en el curso de operativos contrainsurgentes fueron Chirilagua (San Miguel) y la Periquera (Suchitoto).

Por su parte, el FMLN incrementó notablemente su actividad de sabotaje a todo lo largo del mes. En el contexto de ella, 11 de los 14 departamentos del país amanecieron el 12 sin energía eléctrica, a consecuencia de una operación simultánea a nivel nacional que afectó 7 líneas del sistema de distribución de energía y dejó sin fluido eléctrico al 70 por ciento de la zona metropolitana.

Una semana después, el FMLN decretó una nueva campaña de sabotaje al transporte terrestre a nivel nacional, con saldo de por lo menos 76 vehículos parcial o totalmente dañados. También el sabotaje a la estructura productiva y a los servicios públicos dejó fuertes pérdidas. En el curso de la última semana del mes, el FMLN destruyó la oficina de ANTEL de Santa Elena (Usulután) e incendió los cascos de las fincas ca-

fetaleras El Banco, El Banquito, La Mediagua y La Piragua. Asimismo, fue incendiada la oficina de ANTEL de Guatajiagua (Morazán) y la alcaldía de Yamabal, cuyos archivos del registro civil destruyó el FMLN "para que nadie vaya a la nueva farsa electoral." En la misma línea, dos días después fue destruida la alcaldía de Yucuyquín (La Unión), en protesta por "la tercera farsa electoral." Otras acciones relevantes fueron la destrucción del beneficio de café El Marquezado, en las inmediaciones de Santiago de María (Usulután), ocasionando pérdidas por millón y medio de colones; y el ataque a las antenas parabólicas de ANTEL ubicadas en el Cerro La Torrecilla, en la jurisdicción de Bolívar (La Unión), en cuya defensa la Fuerza Armada sufrió por lo menos 20 bajas.

Finalmente, en el área metropolitana, destacó la emboscada que el comando urbano Mardoqueo Cruz, del PRTC, tendió la noche del 20 sobre la Calle Arce y 23 Avenida sur a un camión de la Policía Nacional. En el ataque, efectuado desde varios puntos con fuego de fusilería y lanzacohetes RPG-2, murieron 2 agentes y varios más resultaron heridos de gravedad.

No obstante la ausencia de indicios de que la guerra se estuviese resolviendo por la vía puramente militar, las perspectivas del diálogo siguieron envueltas por una atmósfera de creciente guerrerismo, cuya mejor expresión la constituyó el documento de análisis sobre la situación militar en el cual el Concejo de Movilización Nacional exigía "darle prioridad absoluta a la guerra, no sólo en el aspecto presupuestario sino movilizándolo a toda la nación en busca de una victoria militar próxima y contundente."

Enfrentando este clima de opinión el comité ejecutivo del FDR y la comandancia general del FMLN dirigieron al mandatario el penúltimo día de enero una carta en la cual acusaban al gobierno de haber cedido a las presiones de la oligarquía y "los sectores más reaccionarios del ejército" para descontinuar definitivamente las conversaciones, lo cual mostraba que "la estructura de poder en nuestro país no ha cambiado y continúa siendo dominada por esos sectores minoritarios." No obstante, los frentes reiteraban su disposición a reanudar las pláticas y exhoraban a las mayorías populares y sus organizaciones representativas a no dejarse arrebatar la vía del diálogo por "los eternos enemigos del cambio social y el progreso en nuestro país."

Por su parte, la Iglesia católica mantuvo su apoyo a la solución pacífica dialogada del conflicto. Mons. Rivera indicó en su homilía del 10 que el diálogo continuaría "pese a que tiene sus opositores" y que el Papa estaba "muy contento" de que la Iglesia salvadoreña fuese moderadora en las conversaciones.

No obstante, tanto el gobierno como los frentes reconocieron que el proceso de diálogo se encontraba empantanado y que no existían posibilidades efectivas de reanudarlo, sino hasta después de las elecciones.

En el plano internacional, la administración Reagan hizo una solicitud de 172 millones de dólares para ayuda adicional al gobierno salvadoreño cantidad que habría de sumarse a los 128 millones de dólares en ayuda militar y 341 millones de dólares en asistencia económica, aprobados ya por el Congreso. En respaldo legitimador de la solicitud, la Casa Blanca apeló al informe anual del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, correspondiente a 1984. En la parte relativa a El Salvador, el informe admite que "los abusos de derechos humanos continúan siendo una cuestión central," pero defiende, en contrapartida, que los asesinatos políticos "son ahora sustancialmente menores que en el pasado" y que el gobierno del presidente Duarte está "trabajando activamente para terminar la violencia de las extremas derecha e izquierda, robustecer el imperio de la ley y el sistema de justicia y seguir un diálogo con la izquierda armada dentro de un marco constitucional democrático." Reaccionando a estas valoraciones, diversas organizaciones independientes de monitoreo de derechos humanos, como "Helsinki Watch," "America's Watch" y "The Lawyers Committee for International Human Rights," denunciaron que una descripción tal de la situación salvadoreña tenía más la característica de propaganda de la política exterior de la administración norteamericana que las cualidades de "un informe equitativo."

Desmintiendo también las aseveraciones del informe, el incidente de la Cárcel de mujeres de Ilopango, donde las reclusas políticas se amotinaron contra las prácticas represivas de las autoridades del penal y el creciente flujo de refugiados, reafirmaron que la situación de los derechos humanos en El Salvador distaba todavía de ser satisfactoria. Por lo que respecta a los refugiados, cabe destacar que a mediados del mes se realizó el Primer encuentro centroamericano

sobre refugiados y desplazados, el cual contó con la participación de obispos y representantes de iglesias de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana; así como de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Caritas Internacional, Catholic Relief Services y la Comisión Católica Internacional de Migraciones. El encuentro pretendió realizar un análisis sobre el papel de la Iglesia de cara al "urgente problema" de los refugiados-desplazados en el área y en su declaración final denunció que la raíz fundamental del problema radicaba en "la injusticia social" y exhortó a los gobiernos de la región a "dar prioridad a esta problemática."

No obstante, los gobiernos del área estuvieron más concentrados en los avatares de Contadora, cuyas gestiones se vieron seriamente comprometidas por el boicot que la Administración Reagan patrocinó contra la reunión cumbre de plenipotenciarios la cual debió haberse realizado el 14 y 15 de febrero. La reunión había sido convocada para discutir las observaciones al acta

para la paz y la cooperación en Centroamérica, formuladas por Honduras, El Salvador y Costa Rica en octubre pasado, pero no se llevó a cabo debido a la inasistencia de estos 3 países, los cuales pretextaron la "flagrante violación del derecho de asilo" perpetrada por Nicaragua al sacar por la fuerza de la embajada costarricense en Managua al estudiante José Urbina Lara.

En resumen, las perspectivas durante el mes de febrero, tanto nacionales como regionales, siguieron siendo desalentadoras. Al interior de El Salvador, la dinámica de los acontecimientos siguió subordinada a la guerra, no obstante los preparativos para consolidar el proceso de institucionalización del poder formal mediante un nuevo evento electoral. Correlativamente, la situación regional se vio agitada por tensiones cuyo enfrentamiento primario estuvo más cerca de las medidas de hecho que de las soluciones diplomáticas. En uno y otro caso, la necesidad de solventar la crisis siguió pospuesta al interés de Estados Unidos por recuperar su control hegemónico sobre la zona.

